

HATCH v. BAEZ (1876)

UNDERHILL v. HERNANDEZ (1897)

JIMENEZ v. ARISTEGUIETA (1962)

BANCO NACIONAL DE CUBA v. SABBATINO (1964)

FILARTIGA v. PENA-IRALA (1980)

US v. NORIEGA (1990)

US v. ALVAREZ-MACHAIN (1992)

HILAO v. MARCOS (1994)

KADIC v. KARADZIC (1995)

REGINA v. BARTLE ex parte PINOCHET (1998)

## HATCH v. BAEZ (1876)

Buenaventura BAEZ fue Presidente de la República Dominicana por los períodos de 1865-1866, 1868-1874 en que entró en problemas políticos y de inversiones con Davis HATCH y 1876-1878. Favoreció la restauración española de 1861 y consiguió firmar un tratado de anexión con Ulysses S. GRANT, presidente de EE.UU., que fue luego rechazado por el Senado norteamericano.

Davis HATCH, norteamericano, era agente de una importante empresa minera de New York, que en 1850 obtuvo una importante concesión minera en la República Dominicana. Al ocurrir la restauración española consiguió una concesión de sal mineral en 1862, sin embargo, en 1865, con el retorno a la independencia, HATCH comenzó a tener problemas con el presidente BAEZ, en particular porque BAEZ negociaba intensamente un tratado de anexión con los EE.UU., llegando a firmarlo en 1869.

## HATCH v. BAEZ (1876)

HATCH se mostraba partidario de mantener la independencia, en especial, por motivos tributarios, y apoyó económicamente a la facción independentista. Fue apresado en Agosto de 1869, juzgado por una corte marcial y sentenciado a muerte, pero le fue conmutada por la expulsión. El 16 de abril de 1870, HATCH partió a Cuba, entonces colonia española, en el buque USS YANTIC, dando fin al incidente.

El influyente HATCH y su compañía minera, desataron un escándalo político en el Congreso norteamericano, creando comisiones investigadoras sobre el incidente y las tratativas de los diplomáticos norteamericanos en Dominicana para prolongar la prisión de HATCH y buscar apoyo para ratificar el tratado de anexión. Para 1876, el entonces ex-presidente BAEZ visitó EE.UU. y fue demandado por HATCH, ante las cortes estatales de New York, pero BAEZ estaba por retornar a la presidencia dominicana y el caso fue desestimado en la Corte Suprema del Estado de Nueva York.

## HATCH v. BAEZ (1876)

HATCH demandó por lesiones a BAEZ, sosteniendo que los actos del acusado deben ser considerados como si hubieran sido realizados en su capacidad privada.

*"Ningún acto injusto u opresivo cometido a instigación suya sobre ninguno de sus súbditos, u otros con derecho a protección, es en ningún sentido verdadero el acto del ejecutivo en su capacidad pública y representativa, sino del hombre simplemente, valorado igual que otros hombres en su condición privada; porque en la perpetración de ofensas no autorizadas de esta naturaleza, se desprende de sus prerrogativas regias y desciende al nivel de aquellos delincuentes sin título, contra cuyos delitos es el más alto propósito del Gobierno el ofrecerle protección".*

HATCH v. BAEZ (1876)

Pero el tribunal rechazó el argumento del demandante.

El Juez GILBERT afirmó:

*"Los agravios y daños de los que el demandante se queda fueron infligidos sobre él por parte del Gobierno de Santo Domingo, mientras él residió en dicho país, y se encontraba a todos los efectos sometido a sus leyes. Consiste en actos realizados por el acusado en su capacidad oficial de Presidente de aquella República. La única cuestión es la de si es responsable ante la jurisdicción de los tribunales de este Estado por esos actos".*

HATCH v. BAEZ (1876)

Continúa el Juez GILBERT afirmó:

*"La regla general, sin duda, es que todas las personas y propiedades que se encuentran dentro de la jurisdicción territorial de un Estado son responsables ante la jurisdicción de los tribunales. Pero la inmunidad de los individuos respecto de las demandas planteadas ante tribunales de otros países por actos realizados dentro de sus propios Estados, en el ejercicio de su soberanía, es esencial para preservar la paz y armonía de las naciones, y tiene la sanción de la más reputada doctrina del derecho internacional. También se ha reconocido en todas las decisiones judiciales sobre la materia a las que he tenido acceso".*

HATCH v. BAEZ (1876)

¿A qué reputada doctrina se refería el Juez GILBERT?

La doctrina de la inmunidad de jurisdicción y ejecución de los soberanos, enunciada en el aforismo: PAR IN PAREM NON HABET IMPERIUM.

Tal doctrina había sido recogida por primera vez en el caso THE SCHOONER EXCHANGE v. McFADDEN (1812), por el famoso Juez MARSHALL.

El EXCHANGE era un barco propiedad del norteamericano McFADDEN. La nave fue arrestada en Cantabria por la armada de Francia, expropiada y convertida en buque de guerra. En una arribada forzosa al puerto de Philadelphia, fue reclamado por su antiguo dueño, en una acción "in rem". El Fiscal General se opuso a la demanda argumentando que Francia no podía ser traída a las cortes de los Estados Unidos, dada su inmunidad.

## UNDERHILL v. HERNANDEZ (1897)

José Manuel HERNANDEZ, apodado "El Mocho", fue un popular caudillo y general venezolano, involucrado en política para fines del siglo XIX. Fue opositor al régimen de Raimundo ANDUEZA, presidente venezolano de 1890-1892, que intentó extender su mandato hasta 1894, desatando la rebelión del general Joaquín CRESPO, en la llamada "Revolución Legalista" en Abril de 1892.

Triunfante la revolución de CRESPO, el general HERNANDEZ ocupa Ciudad Bolívar, el 19 de Agosto de 1892, y es nombrado jefe civil y militar de la sección Guayana del estado Bolívar, cargo que cumple hasta Diciembre. Es en esta época donde surge el conflicto con UNDERHILL.

Luego pasa una larga temporada en EE.UU., sostenido por su amigo Manuel CADENAS, comerciante venezolano establecido en New York.



## UNDERHILL v. HERNANDEZ (1897)

En New York, HERNANDEZ fue demandado por el ciudadano norteamericano George F. UNDERHILL, pues HERNANDEZ había obligado a vender su contrato del acueducto de Ciudad Bolívar, por un precio irrisorio, mientras lo mantenía preso a él y a su esposa. El hecho de ser demandado aumentó su prestigio de patriota y, curiosamente, su fama de hombre honrado.

Más curioso fue que para 1896 regresa a Venezuela, bajo fianza, para ser candidato presidencial. Con una campaña intensa y moderna, era el favorito, pero su antiguo amigo, el general CRESPO, entonces presidente y por mucho el hombre más influyente y poderoso de Venezuela, impuso a su candidato Ignacio ANDRADE. Ante el fraude, HERNANDEZ se alza en Queipa, en Marzo de 1898. En Abril de 1898, en el combate de la Mata Carmelera, cae abatido el general CRESPO, cambiando por completo y para siempre la historia venezolana.

## UNDERHILL v. HERNANDEZ (1897)

George F. UNDERHILL, había sido cónsul norteamericano en Venezuela, y había conseguido las concesiones para construir y explotar el acueducto de Ciudad Bolívar. En medio de la revolución de 1892, UNDERHILL y su mujer fueron apresados por orden de HERNANDEZ, quien obligó a UNDERHILL a vender sus derechos sobre el acueducto, por un precio irrisorio, a una empresa llamada B. TOMASSI y CIA.

Una vez vendidos los derechos, fueron liberados y expulsados del país. De vuelta en New York, demandaron a HERNANDEZ por daños.

El caso llegó a la Corte Suprema de Justicia y comenzó la elaboración jurisprudencial de la doctrina del "Act of State".

## UNDERHILL v. HERNANDEZ (1897)

El Presidente de la Corte Suprema, Juez FULLER afirmó:

*"Cada Estado soberano está obligado a respetar la independencia de cualquier otro Estado soberano, y los tribunales de un país no juzgarán los actos del Gobierno de otro, realizados en el interior de su territorio. La compensación de los agravios por causa de tales actos debe obtenerse a través de vías establecidas entre los Estados soberanos mismos".*

Y prosigue el Juez FULLER:

*"...los actos del acusado eran actos del Gobierno de Venezuela, y como tales no son propiamente objeto de enjuiciamiento en los tribunales de otro Gobierno".*

Es la enunciación de la doctrina del "Acto de Estado".

## BANCO NACIONAL DE CUBA v. SABBATINO (1962)

Este caso originariamente va a reafirmar la doctrina del Acto de Estado, sin embargo, por modificaciones introducidas por la enmienda HICKENLOOPER, el caso va a dar un resultado distinto.

Al triunfo de la revolución cubana, en 1959, comenzó un proceso de nacionalización de empresas extranjeras, mayormente norteamericanas, que fueron intervenidas y luego expropiadas sin compensación alguna.

En Julio de 1960, y en represalia a la medida norteamericana de reducir la cuota de importación azucarera cubana, el gobierno cubano expropió varias empresas norteamericanas, entre ellas, una compañía azucarera cubana, controlada por inversionistas norteamericanos, llamada Compañía Azucarera Vertientes C.A.V.

## BANCO NACIONAL DE CUBA v. SABBATINO (1962)

La empresa norteamericana de corredores FARR, WHITLOCK & CO. había contratado con C.A.V., a favor de un comprador marroquí, la compra de un cargamento de azúcar granel. Comenzando la carga del granel en el buque, que tenía destino a Marruecos, la empresa C.A.V. fue expropiada, y la empresa corredora negoció los nuevos documentos de embarque y compraventa con CUBAZUCAR, la empresa estatal cubana que controlaba ahora toda la gestión comercial de exportación de productos azucareros.

Los documentos de la operación fueron hechos a nombre del BANCO PARA EL COMERCIO EXTERIOR, de Cuba, quien ahora, centralizadamente, se encargaba de la parte financiera de las operaciones de exportación. Para efectos de cobrar la operación en New York, el banco cubano encargó al BANCO NACIONAL DE CUBA y este a su vez a su agente en tal ciudad, SOCIETE GENERALE, para que realizara la cobranza.

## BANCO NACIONAL DE CUBA v. SABBATINO (1962)

Para más complicación, la casa matriz de C.A.V. en EE.UU. solicitó judicialmente que todos los dineros adeudados por embarques de azúcar le fueran pagados a ella, y la Corte Suprema del Estado de New York nombró como depositario judicial de los fondos en disputas a favor de C.A.V. al Sr. Peter SABBATINO.

Una vez recibido el cargamento, y luego de muchas negociaciones y problemas legales, FARR, WHITLOCK & CO. decidió no pagar los conocimientos de embarque a CUBAZUCAR, sino al depositario judicial de C.A.V. en Estados Unidos, SABBATINO.

El BANCO NACIONAL DE CUBA, demandó a SABBATINO, en una Corte Federal de Distrito de New York, para recuperar el dinero pagado indebidamente. Tanto la Corte de Distrito, como la apelación a la Corte de Circuito, fallaron a favor de SABBATINO, pero la Corte Suprema de Justicia revirtió el fallo.

## BANCO NACIONAL DE CUBA v. SABBATINO (1962)

El Juez HARLAN determinó que:

*"A pesar de lo gravoso que pueda ser para la norma pública de este país y de los Estados que lo integran, una expropiación de esta índole, llegamos a la conclusión de que mejor se sirve el interés nacional como al progreso hacia la finalidad de que rija el Derecho Internacional entre las naciones, manteniendo intacta la doctrina del Acto de Estado para que en este caso reine su aplicación".*

Dicha doctrina descansa en una estricta concepción de la separación de poderes.

## BANCO NACIONAL DE CUBA v. SABBATINO (1962)

*"Todo Estado soberano está obligado a respetar la independencia de cada uno de los otros Estados soberanos y los tribunales de un país no deben juzgar los actos de gobierno del otro país realizados dentro de su propio territorio".*

*"La reparación de agravios por razón de tales actos se deben obtener por medio de los canales abiertos a la disposición de las potencias soberanas en sus relaciones entre sí."*

La Corte Suprema de Justicia estimó que los pagos debían restituirse a CUBAZUCAR, al sostener que el acto de expropiación no podía ser juzgado en cortes norteamericanas, por lo que declinaban su jurisdicción pero manteniendo la presunción de legalidad de tales actos, entonces los pagos a SABBATINO eran erróneos. El caso se devolvió a primera instancia.



## BANCO NACIONAL DE CUBA v. SABBATINO (1962)

El Congreso norteamericano reaccionó ferozmente contra la decisión de la Corte Suprema de Justicia, al punto de que aprobó una enmienda, la HICKENLOOPER II, que fue pasada antes de que el caso fuera revisado por la Corte de Distrito en primera instancia.

La enmienda estableció que se revocaba la presunción de validez de los actos de Estado, en casos de:

- (a) nacionalización, expropiación o incautación de empresas norteamericanas;
- (b) repudio o anulación de contratos o acuerdos con empresas norteamericanos; y
- (c) impuestos discriminatorios, exacciones u otras medidas con efecto de nacionalizar, expropiar o incautar propiedades norteamericanas.

## BANCO NACIONAL DE CUBA v. SABBATINO (1962)

En todo caso, las anteriores situaciones serían revertidas con el pago inmediato y efectivo de las debidas compensaciones económicas. Tal excepción no solo eliminaba la presunción de ilegalidad, sino que evitaba que el Presidente de los EE.UU. tomara represalias como la suspensión de ayudas en el seno de la Ley de Asistencia Foránea de 1904.

Asimismo, estableció, a petición expresa del senador por Iowa, Bourke HICKENLOOPER (R), que los tribunales norteamericanos pudieran proseguir con los juicios ejecutivos para compensar las pérdidas no reparadas en las expropiaciones, excepto cuando el Presidente de los EE.UU. a través del Departamento de Justicia, ordenara que la prosecución de tales juicios afectan la política exterior norteamericana.

Como la enmienda era retroactiva, Cuba no pudo cobrar

## US v. NORIEGA (1990)

El general Manuel NORIEGA fue el hombre fuerte de Panamá en la década de los 80's, sin embargo nunca fue Presidente de Panamá. Curiosamente, el general Omar TORRIJOS, que negoció los tratados TORRIJOS-CARTER, tampoco fue presidente nunca, sino el gobernante en la sombra.

El general NORIEGA realizó numerosas y grandes operaciones de narcotráfico entre Colombia, Panamá, Cuba y la Florida. La droga llegaba desde Colombia a Panamá desde donde era transportada por aviones militares hasta Cuba, donde el ejército cubano se encargaba de embalarla apropiadamente para ser lanzada en el estrecho de la Florida, para que fuera recogida e introducida en EE.UU.

## US v. NORIEGA (1990)

Las operaciones de narcotráfico eran seguras hasta Cuba, y el riesgo comenzaba en los lanzamientos que se hacían desde avión en el estrecho de la Florida.

En 1989, Panamá fue invadida por los EE.UU. y fue apresado el General NORIEGA, mientras que se hicieron operativos de la DEA en el estrecho de la Florida que casi capturan al Vice-Ministro del Interior cubano en operaciones de narcotráfico.

En Cuba, ante la invasión a Panamá y las extensas pruebas presentadas por la DEA que involucraban a toda la plana mayor de la nomenclatura cubana en el tráfico de drogas vía Panamá-Cuba, Fidel CASTRO ordenó el arresto, posterior juicio sumario y ejecución del entonces más querido y galardonado militar, quién había ganado para Cuba las guerras en Etiopía y Angola, General Arnaldo OCHOA.

## US v. NORIEGA (1990)

Curiosamente, fue fusilado también, el Coronel Antonio DE LA GUARDIA, quien para 1973 era el oficial de enlace entre la Seguridad del Estado cubano y el GAP del Presidente ALLENDE, y que se llevó a su tumba muchos secretos de espionaje a las FF.AA. chilenas para el momento del golpe militar.

Pero el general NORIEGA, quien en la invasión fue arrestado y trasladado a los EE.UU., fue juzgado por un tribunal federal de la Florida.

Su defensa se basó en su inmunidad como Jefe de Estado, pero como nunca formalmente fue presidente de Panamá, no se le reconoció dicha condición, por lo que no se pudo amparar en ninguna clase de inmunidad.

## US v. NORIEGA (1990)

Además, no se podía amparar en la inmunidad como Jefe de facto del Gobierno panameño, en el sentido de que:

*"En orden a la aplicación de la doctrina del acto de Estado, el acusado debe establecer que sus actividades eran actos de Estado, es decir, que fueron realizados en nombre del Estado y no, como actos privados, en nombre del actor mismo (...) Se ha repetido continuamente que los actos deben ser públicos actos de soberanía. (...) Aunque la distinción entre los actos públicos y privados de gobierno puede resultar esquivo, esta dificultad no ha prevenido a los tribunales de examinar el carácter de la conducta en cuestión".*

Los delitos de narcotráfico cometidos por Noriega no pueden considerarse actos públicos realizados en nombre del Estado de Panamá.

## US v. NORIEGA (1990)

De este caso se deduce que para poder alegar como defensa la inmunidad, se necesitará haber sido Jefe de Estado o de Gobierno y haber actuado dentro del ámbito de sus funciones públicas.

Pero mejor expliquemos que es y como funciona la inmunidad.

En derecho internacional, los Estados son igualmente soberanos en teoría, por lo que no pueden ser sometidos, ni el Estado mismo, ni ninguna de sus manifestaciones, es decir, leyes, decretos, actos administrativos, etc., a enjuiciamiento ni en un tribunal de otro Estado, ni en un tribunal internacional, a menos que el Estado lo consienta.

Es ese el fundamento de la inmunidad, que va a funcionar siempre como una excepción a una demanda.

Sin embargo, se deben seguir varios pasos para determinar cuando se puede aceptar la inmunidad como defensa, en caso de demandas contra jefes de Estado o de Gobierno.

- (1) Indagar si el Estado demandado está reconocido por el Estado del foro. En el caso *US. v. LUMUMBA* (1984), el demandado argumentó que el era Vice-Presidente y Ministro de Justicia de la República de Nueva África, creada por los negros de los estados ribereños al río Mississippi.

En *KADIC v. KARADZIC* (1995), este último alegó que era presidente de la República Serbia en Bosnia, llamada Srpska, estado no reconocido por EE.UU. y aún cuando Karadzic entró con pasaporte diplomático a los EE.UU., para reuniones en la ONU, en ningún momento se reconoció como Estado a Srpska, ni a Karadzic como su presidente.



- (2) Indagar si el demandado está en funciones. De estarlo, goza de inmunidad "ratione personae". Así, en casos como TACHIONA v. MUGABE (2001), el demandado ni siquiera ha sido notificado pues es Jefe de Estado en funciones, de un estado reconocido internacionalmente como es Zimbabwe.
- (3) Si el demandado no está en funciones, facilita la demanda, pero habrá que distinguir si los hechos por los que es demandado se amparan en los llamados "actos de estado", lo que querrá decir, que goza de inmunidad "ratione materiae". En este sentido, con dudas, HATCH v. BAEZ (1876). Por el contrario, si se estima que los actos fueron realizados en su capacidad privada, aún cuando estuvo en ejercicio de la jefatura de Estado, se considerará que no tiene inmunidad. Así, JIMENEZ v. ARISTEGUIETA (1962), donde el dictador venezolano Marcos PEREZ-JIMENEZ fue extraditado a Venezuela, o en el caso HILAO v. MARCOS (1994).

## JIMENEZ v. ARISTEGUIETA (1962)

En este caso, Venezuela pidió la extradición de su antiguo dictador, alegando cuatro cargos de asesinato, y varios delitos financieros. No había evidencias suficientes para los cargos de asesinato. Pero el juez McRAE consideró que los delitos financieros alegados fueron cometidos para su beneficio privado:

*"...son delitos comunes cometidos por el Jefe de Estado realizados en violación de su cargo y no conforme al mismo".*

*"Sólo cuando los funcionarios con autoridad soberana actúan oficialmente, la doctrina del acto de Estado resulta aplicable".*

## HILAO v. MARCOS (1994)

En este caso, Máximo HILAO, junto a otros, demandaron a los herederos (los bienes hereditarios) de Ferdinand MARCOS, presidente de Filipinas de 1965-1986. MARCOS se hizo famoso en Chile por haber rechazado la visita del General PINOCHET, estando este en pleno vuelo hacia Filipinas, provocando la ruptura de relaciones diplomáticas entre ambos estados.

Murió MARCOS en Hawaii, en 1989, exiliado y con una inmensa fortuna obtenida de grandes y reiteradas operaciones de corrupción. Durante su gobierno, ordenó una feroz represión y tortura de sus opositores.

Con el tema hereditario radicado en EE.UU., muchos opositores filipinos demandaron indemnizaciones a cargo de los bienes hereditarios, entre ellos Máximo HILAO.

## HILAO v. MARCOS (1994)

Los herederos de MARCOS solicitaron la inmunidad. Pero en realidad, el gobierno de Filipinas manifestó que la demanda debía continuar, renunciando a toda inmunidad y desprotegiendo de un eventual endoso diplomático a dichos herederos.

Sin lugar a dudas, tanto la tortura como los hechos de corrupción de MARCOS, no se amparan en los actos de Estado, pues estos no deben ser en ningún caso contrarios al derecho internacional (tortura) ni realizados en beneficio privado (corrupción).

## REGINA v. BARTLE ex parte PINOCHET (1998)

Acá, si hacemos los tres análisis anteriores, podemos llegar a la conclusión de que no tiene inmunidad el General PINOCHET.

Chile está reconocido por Reino Unido, el General PINOCHET no está en ejercicio, queda saber si su actos de entonces "son actos de estado".

Bajo todos los precedentes vistos, sale a la luz que desde los casos HATCH v. BAEZ (1876) y UNDERHILL v. HERNANDEZ (1897), la jurisprudencia ha variado al establecer desde JIMENEZ v. ARISTEGUIETA (1964) e HILAO v. MARCOS (1994), que los actos ilícitos internacionalmente y los realizados en su capacidad privada, no son actos de Estado.

## REGINA v. BARTLE ex parte PINOCHET (1998)

En este caso, la situación se complica un poco más, pues se trata de un pedido de extradición de España.

Debiendo cumplir con requisitos de doble criminalidad, los jueces británicos recortaron muchísimo el número de delitos imputados a PINOCHET. Pero, estimaron que era procedente su extradición a España, pero siendo que la decisión de extraditar descansa en el gobierno y no en los tribunales británicos, el entonces Ministro del Interior, Jack STRAW, decidió devolverlo a Chile, por razones humanitarias.

El caso PINOCHET es paradigmático pues por una parte afirmó la jurisdicción universal, y por otra parte, eliminó la posibilidad de ampararse en la inmunidad por actos de estado.